

Imprimir

El proceso electoral colombiano, se desarrolló en el contexto geopolítico de la “Nueva Estrategia de Seguridad Nacional” del presidente Donald Trump, inspirada en el consigna de “América Primero”, que ha derivado en una criminal campaña en alianza con el régimen Nazi - Sionista de Israel, de exterminio y genocidio del pueblo palestino, la guerra contra Irán, el bombardeo sistemático contra Yemen y El Líbano; clara ofensiva por el control de los recursos energéticos del medio oriente y el avance del proyecto del gran Israel del régimen sionista.

En América Latina y el Caribe, basado en la “Doctrina Monroe” desencadenó, con sus bandas fascistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, (ICE por su sigla en Inglés), una criminal cacería contra los inmigrantes indocumentados, principalmente latinoamericanos, a quienes considera “una amenaza para la seguridad nacional”, una vez capturados, sin garantías procesales, son torturados, encadenados y deportados en masa a sus respectivos países; en no pocos casos, son sindicados, sin pruebas, de criminales internacionales, para enviarlos bien a la mega cárcel(CCOT), ubicada en El Salvador, alquilada al neofascista dictador, Nayib Bukele; o, bien, a la Base Naval de la bahía cubana de Guantánamo, ocupada militarmente por los Yanquis.

Con el propósito de recuperar la total hegemonía sobre el hemisferio occidental, desató una ofensiva contra gobiernos de los países latinoamericanos y del Caribe, que habían decidido, en el marco del derecho internacional de la paz, ejercer su soberanía, frente al dominio del hegemon imperialista; Cuba y Venezuela fueron calificados de narcoterroristas y/o “amenazas para la seguridad nacional”, para endurecer las inhumanas y drásticas sanciones económicas, bloqueos comerciales y diplomáticos, impuestas a ambo países por gobiernos bipartidistas anteriores; y, los sometió a un cerco naval y militar sin precedentes; luego, atacó con misiles, tanto en el Mar Caribe, como, en el océano pacífico, a más de cien pequeñas embarcaciones pesqueras, masacrando cerca de 200 ciudadanos latinoamericanos y caribeños, acusados, sin pruebas, desconociendo tratados internacionales, de “narco terroristas”.

El desenlace fue la orden del bombardeo a Caracas, con saldo de más de cien muertos,

incluidos 30 de soldados cubanos que hacían parte de la guardia del presidente Maduro, la destrucción de decenas de edificios residenciales y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, junto con su esposa, Cilia Flóres, que es además diputada de la Asamblea Nacional Venezolana. Esta cruel y desproporcionada acción puso al descubierto que la verdadera intención del gobierno gringo era recuperar, para las multinacionales norteamericanas la más grande reserva petrolera del mundo, que consideraba, sin fundamento legal, de su propiedad. Al tiempo que, sin, supuestamente, derrocar el poder del Chavismo, ni levantarle las sanciones al país, encargó de la presidencia a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, convirtiendo a Venezuela en una nueva colonia norteamericana.

Cuba continúa sitiada por una flota naval norteamericana, sometida a un embargo total, económico, comercial, sanitario, petrolero y energético; el pueblo sigue condenado a la hambruna, la desnutrición, la miseria y la muerte. Un verdadero genocidio ejecutado en cámara lenta durante más de seis décadas. Tanto en Cuba como en Venezuela el imperio del norte ha pisoteado la dignidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Adicionalmente, el gobierno imperial ha desatado su descarada injerencia política en los Estados Latinoamericanos; especialmente en los procesos electorales, para imponer fraudulentamente gobiernos serviles a los intereses del capital financiero internacional y de las multinacionales norteamericanas; tales como, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras, Javier Milei de Argentina, Bolsonaro de Brasil, (derrotado por Lula), Rodrigo Paz Pereira de Bolivia, José Antonio Kast de Chile, Daniel Noboa de Ecuador y Keiko Fujimori de Perú. Países que, con excepción de Brasil, México y Colombia, fueron articulados a su iniciativa de “El Escudo de las Américas”, creado el pasado 7 de marzo de 2026 en la cumbre celebrada en Doral (Florida) de los EE. UU, como herramienta o garrote para consolidar su hegemonía en el hemisferio occidental.

Dichos gobiernos, fueron elegidos de la mano de Trump y algunos congresistas republicanos, mediante sus declaraciones que convocaban a la ciudadanía de su respectivo país a apoyarlos, previo compromiso de sometimiento a la nueva doctrina de seguridad de Trump, de supuesta lucha contra el “narco-terrorismo” internacional, la realización de operaciones

militares conjuntas contra supuestas “transnacionales del crimen”, tanto en cada territorio nacional, como en sus fronteras, apoyar la deportación de migrantes latinoamericanos a sus propios países; amén, de enfrentar la presencia comercial de potencias como China y Rusia en América Latina, y subordinar sus políticas económicas, comerciales y diplomáticas a los intereses de los Estados Unidos.

En este contexto, de ofensiva imperialista contra la soberanía, la democracia, la paz y los derechos humanos, se desarrollaron las recientes elecciones en Colombia, en las que, con el estrecho margen de menos del 1% triunfó, el ultra derechista Abelardo de la Espriella, alias el “mata Gatos”, sobre el candidato del Pacto Histórico y la alianza por la vida, Iván Cepeda Castro; quien, como una ironía de estos aciagos tiempos, obtuvo la más alta votación de la historia por un candidato de la izquierda, el progresismo y los movimientos sociales.

Iván Cepeda, quizá de manera precipitada, reconoció el triunfo del nuevo lacayo del imperialismo en la región; pero, declaró que “aceptar el resultado no significa renunciar a la verdad, ni guardar silencio frente a los graves hechos que marcaron la contienda presidencial”. Tales hechos, configuran, a nuestro juicio, que, la mano metida del imperio, contribuyó descaradamente al fraude electoral, que ilegítimamente eligió al “Destripador” como el nuevo presidente de la República. Citaremos para el debate, solo algunos hechos relevantes que así lo demuestran.

En primer lugar, el abierto injerencismo de Donald Trump, mediante falsos señalamientos de “jefe del narcotráfico” al presidente Gustavo Petro, su inclusión en la “lista Clinton”, amenaza de intervención militar en Colombia para “capturarlo” como a Maduro, someterlo a juicio ante la justicia estadounidense; amenazas repetidas a lo largo de su campaña, por el candidato de las mafias, con promesa incluida de extraditarlo si así lo demandara el gobierno estadounidense. Acciones que luego fueron acompañadas con declaraciones que convocaron abiertamente a votar por Abelardo “El Tigre” de la Espriella. Para reafirmar su injerencia, reclamó que gracias a su apoyo el destripador había salido elegido.

Como cajas de resonancia, el secretario de Estado, Marcos Rubio y los senadores

republicanos, Bernie Moreno, María Elvira Salazar, Díaz Balart; entre otros, mediante reiterados mensajes, estigmatizaron el gobierno de Petro, al tiempo que convocaron a la ciudadanía a votar por el candidato de Trump, divulgaron falsas acusaciones contra Iván Cepeda, etc. Como si fuera poco, el multimillonario norteamericano, Dan Newlin, uno de los grandes financiadores de las campañas de Trump, acompañó a Abelardo en la tarima de su acto de cierre en Barranquilla; quien, públicamente invitó a votar por el designado de Trump. Así se consumó, como prueba irrefutable, la intervención directa del gobierno gringo para constreñir el voto de la ciudadanía colombiana.

En segundo lugar, Iván Cepeda denunció que de la Espriella “llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular”; con millones de dólares aportados, según versiones ampliamente circuladas, por los gobiernos del presidente gringo y por el sionista, Benjamín Netanyahu; además de los infaltables aportes de las mafias narcotraficantes, clanes regionales, los banqueros y los gremios económicos colombianos. Se rumora que fueron más de \$36.000 millones invertidos, por fuera de los topes electorales, en la dolosa operación de compra de votos con dineros provenientes del extranjero. Aportes que visiblemente alteraron el resultado electoral.

En tercer lugar, el excandidato Cepeda reveló que “también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial” operadas desde el exterior, tal como ocurrió con el fraude cibernético que definió el triunfo de los presidentes de Ecuador y Honduras; A estos hechos se suma el “llamado Honduras Gate” que comprometió al expresidente convicto de Honduras y condenado en los EE. UU., por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, pero indultado por Donald Trump, en el desarrollo de operativos digitales, para desestabilizar los gobiernos de Colombia, México y Brasil. Es evidente que invirtieron sumas astronómicas en bodegas, bots digitales, redes sociales, granjas de trolls, para inflar artificialmente el candidato de la muerte, masificar la campaña de desinformación, calumnias y aniquilamiento moral del senador Cepeda y sembrar artificialmente el supuesto apoyo masivo (astroturfing), de Abelardo. Exitosa herramienta de manipulación digital del electorado, principalmente dirigida a la clase media y la población urbana. Prácticas de inaceptables que “han lesionado la transparencia de este proceso y

cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno” (Iván Cepeda).

En cuarto lugar, durante el proceso electoral, se hizo de público conocimiento que Abelardo de la Espriella, para optar por la nacionalidad y la ciudadanía estadounidense, debió renunciar a la nacionalidad y la ciudadanía colombiana y hacer un juramento de lealtad exclusiva a los Estados Unidos de Norteamérica; situación que, en caso de conflicto entre Colombia y los EE. UU., Abelardo, en su condición de presidente no ofrecería ninguna garantía de lealtad con nuestro país, dado que al ser ciudadano norteamericano, primaría su juramentada lealtad a los Estados Unidos. Lo cual indica que el presidente electo engañó al país, a las instituciones y a los cerca de trece millones de ciudadanos que lo eligieron.

En quinto lugar, como una prueba más de injerencia indebida de un gobierno extranjero, el presidente narcotraficante de Ecuador, quien, por presunta orden de Trump le había declarado la guerra arancelaria al gobierno colombiano, en videollamada deliberadamente difundida, se comprometió con Abelardo, a reducir a cero los altos aranceles que había impuesto unilateralmente a las importaciones de productos colombianos, a partir del 22 de junio; estaba seguro de que este ganaría las elecciones el día anterior.

En sexto lugar, es de público conocimiento que, De la Espriella, además de carecer de experiencia en la administración de lo público, exhibe un historial, de defensor de mafiosos, narco paramilitares, contrabandistas, estafadores, a los que además ha estafado, se dice que esa es la fuente de su inmensa fortuna; además, 11 parlamentarios demócratas de las EE. UU., han solicitado a la justicia gringa que investiguen el origen de su fortuna, posiblemente adquirida mediante operaciones de lavado de activos en los Estados Unidos, seguramente provenientes del narcotráfico. Dado su prontuario este personaje carece de autoridad moral para dirigir los destinos de nuestro país.

En séptimo lugar el ilegítimo presidente electo, le mintió a sus electores, al asegurar que su campaña era con los que nunca habían gobernado, contra los “de siempre” que habían “vivido de la teta del Estado”; pero las evidencias indican, que desde la primera vuelta, el poder económico y el poder político, apoyaron con su consentimiento a Abelardo.

50 de 57 clanes regionales, los Char, los Gnecco, los Gerlein, los Blel, los Cotes, los Name, los Aguilar, los de Dilian Francisco, los Guerra Tulena, los García Romero, los Besaile, etc., los partidos políticos de la extrema derecha neoliberal, el Centro Democrático, el partido liberal, el partido conservador, cambio Radical, partido de la U, los parapolíticos, los narcotraficantes, los gremios económicos, los medios corporativos, etc.; es decir, las mafias que durante los últimos 200 años han gobernado al país y han amasado fabulosas fortunas mediante el saqueo sistemático del Erario y el patrimonio público seguirán ordeñando la teta del Estado, como parte del ilegítimo gobierno del mata gatos. Así lo demuestran sus primeros anuncios de nombramientos ministeriales.

Por todo lo anterior, me sumo a la desobediencia civil contra el nuevo gobierno, declarada por nuestro excandidato Iván Cepeda Castro.

José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.

Foto tomada de: Iván Cepeda Castro